Determinantes Políticos de las Transferencias Discrecionales

Evidencia de la Provincia de Córdoba, Argentina.

Mauro Mediavilla Bordalejo

Universidad de Barcelona

Abstract

Este trabajo examina el impacto de la táctica política en la distribución de las transferencias de fondos discrecionales entre el gobierno provincial y los municipios. Se analizan las diferentes teorías basadas en modelos partidistas y no partidistas, analizando con más detalle las teorías del primer grupo debido a que son las que se intentarán contrastar empíricamente para los municipios de la provincia de Córdoba, en Argentina.

Los resultados obtenidos permiten confirmar la existencia de factores políticos y económicos como determinantes de la asignación de las transferencias discrecionales. En relación a las teorías que se intentaron evaluar este territorio, ninguno de los modelos teóricos explicados se ven reflejados en este caso en sentido estricto, pero si una combinación entre ellos.

El hecho de que el alcalde sea o no del mismo partido que el gobierno provincial, relacionado con las variable políticas sugeridas por los modelos de Lindbeck & Weibull y Dixit & Londregan, acaba siendo determinante para entender la asignación de las transferencias entre los municipios de la provincia de Córdoba. Las transferencias se dirigen hacia municipios con alcalde del mismo partido en la medida que el apoyo en ese distrito es mayor, y reducen las transferencias en municipios dominados por alcaldes de otros partidos si la diferencia en las elecciones es escasa debido a la presunción de una utilización política de los fondos por parte del alcalde con el objeto de ganar votos para su partido.

Código JEL: D72; H77

Palabras claves: Transferencias discrecionales; Táctica política; Córdoba, Argentina

I. Introducción

Las transferencias discrecionales han sido objeto de estudio desde hace años y bajo dos visiones claramente diferenciadas. La visión tradicional, desarrollada por Oates (1972) y Gramlich (1977), se fundamenta en consideraciones de eficiencia y equidad. Desde el punto de vista de la equidad los gobiernos intentan compensar los desequilibrios interregionales existentes, debido a la baja capacidad fiscal o altas necesidades de gasto público existentes en algunos territorios, asegurando una cierta igualdad en el acceso a los servicios públicos [Boadway & Flatters (1982) y LeGrand (1975)]. El objetivo de la eficiencia consiste en internalizar, mediante transferencias, las diferentes externalidades fiscales interjurisdiccionales [como por ejemplo: los desbordamientos de los beneficios de los servicios públicos ("spillovers"); la exportación de la carga impositiva o la competencia fiscal] que existen entre las regiones y que se generan a partir de las decisiones fiscales tomadas de forma independiente por los políticos acerca del nivel de provisión de bienes públicos y de presión tributaria. Un efecto negativo derivado de estas externalidades, y que es el que se intenta disminuir, es la provisión inferior a la óptima de los bienes públicos locales.

La presente investigación se inserta dentro de la otra visión que incluye, además de condicionantes económicos, motivos de táctica política como determinantes de las decisiones de distribución de estos fondos. Por ejemplo, Inman (1988), en su trabajo sobre las ayudas federales en los Estados Unidos concluye que el modelo basado en conceptos de equidad y eficiencia no consigue explicarlas totalmente y que las consideraciones políticas juegan un importante rol en su asignación. Según Dixit & Londregan (1996), la redistribución económica se produce por dos vías: la primera se manifiesta en el diseño de los impuestos y el sistema de bienestar, estructura relativamente fija en el corto plazo; y la segunda en la redistribución táctica. Ésta puede tomar distintas formas, como subsidios o tarifas de protección para industrias a nivel territorial, construcción de infraestructuras en determinados distritos y/o transferencias intergubernamentales, objeto de estudio en el presente trabajo.

Los primeros estudios realizados sobre aspectos relacionados con la redistribución táctica a nivel territorial se realizaron en los Estados Unidos. Su objetivo era estudiar la real incidencia de los intereses partidarios del gobierno central en la diagramación de las políticas públicas y la asignación de los fondos entre los estados miembros llevadas a cabo dentro del plan estatal de subsidios y obra pública llamado "New Deal". Se introdujeron variables políticas que intentaban explicar la redistribución hecha de los fondos

públicos entre los estados. El estudio pionero de Wright (1974) propone un modelo donde el presidente maximiza la probabilidad de ganar y los votantes reaccionan positivamente a los incremento de gasto público. El modelo desarrollado por este autor predice que la opción óptima, desde el punto de vista del político, consiste en destinar los fondos a los estados con alta "productividad política". Este último concepto es una medida dependiente del voto electoral per cápita, de la variabilidad en el porcentaje de votos del partido en el gobierno en las últimas elecciones y de la predicción acerca del grado de competitividad que tendrán las próximas elecciones presidenciales. Los resultados obtenidos demuestran el fomento de las inequidades entre los estados que esta práctica comporta. Otro autor, Wallis (1998), analiza la distribución de los fondos federales durante el "New Deal", encontrando que tanto elementos políticos como económicos influenciaron en su asignación. Por último, un trabajo de Strömberg (2004) relaciona el acceso a la información por parte de los ciudadanos, materializada en el acceso a la radio durante las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, como elemento clave para determinar la importancia política diferencial de ciertas regiones del país. Estos diferentes grados de importancia política resultan determinantes para explicar las políticas de asignación de ciertos gastos federales pertenecientes a los programas del "New Deal". La conclusión del trabajo es que los gastos se centraron en las regiones donde la población tenía más información y por lo tanto reaccionaría en mayor medida a las políticas públicas, incrementando los votos al partido del presidente.

Los incentivos políticos hacia la redistribución táctica dependen del entorno institucional concreto en que se desarrollan. En este sentido, Levitt & Poterba (1999) realizan una clasificación de los diferentes modelos que intentan explicar el mecanismo de incentivos que determina la distribución de los fondos discrecionales, distinguiendo entre los modelos partidistas y no partidistas. En primer lugar, los modelos de distribución partidista se caracterizan por la importancia de la política del partido político por encima de las voluntades individuales de los legisladores, siendo el objetivo partidista obtener una mayoría en el legislativo. Dentro de este grupo de modelos existen, a su vez, dos subgrupos de trabajos que ayudan a explicar el diseño de las transferencias discrecionales desde un punto de vista político. El primero corresponde a los trabajos de Lindbeck & Weibull (1987, 1993) y Dixit & Londregan (1996, 1998) que proponen un esquema teórico donde los distritos con un mayor peso de votantes con alta predisposición a cambiar su opción electoral, es decir, con poca afinidad ideológica hacia algún partido político, recibirían una mayor cantidad de fondos. Dichos fondos estarían destinados a convencer a éste grupo de votantes, para que se inclinen por el partido gobernante. Los políticos son neutrales al riesgo, por lo que están en condiciones de realizar transferencias

hacia distritos con mayor rentabilidad política aunque tengan más riesgo electoral. El segundo subgrupo de trabajos se originan a partir de la hipótesis desarrollada por Cox & McCubbins (1986), según la cual los distritos electorales donde el gobierno central tiene un mayor apoyo popular (mayor porcentaje de votos) recibirían mayores transferencias relativas. Este resultado es debido a la aversión al riesgo que tiene el candidato que lo obliga a asegurarse un mínimo de votos, obtenido de sus seguidores más fieles.

En segundo lugar, Levitt & Poterba proponen modelos no partidarios, que ponen en primer lugar los objetivos del legislador antes que los del partido al que representa. En este caso será el legislador el que intentará aplicar políticas que beneficien a su electorado en particular. Además, plantean que los legisladores tendrán diferente influencia sobre los recursos a distribuir como resultado de su posición y nivel de predominio respecto al de sus homólogos en el parlamento.

La presente investigación se inserta en la literatura empírica que intenta contrastar las teorías que incorporan la táctica política como determinante de las transferencias intergubernamentales de tipo discrecional, entre lo que se podrían citar trabajos de Case (2001), Dahlberg & Johansson (2002) y Johansson (2003) entre otros. Más concretamente, se intentará evaluar el grado de aplicación de los modelos partidarios en los municipios de la Provincia de Córdoba en Argentina. Se contrastan empíricamente los modelos de Lindbeck & Weibull, Dixit & Londregan, por un lado, y de Cox & McCubbins por otro.

Esta aproximación empírica es la primera realizada sobre este tema, a nivel municipal en Argentina, aunque existen otros trabajos relacionados. Este es el caso de la investigación de Abuefalia & Meloni (2000) y de Porto & Sanguinetti (2001). El primero intenta determinar si algunos indicadores macroeconómicos en el ámbito estatal (provincial) influyeron en los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 1989, 1995 y 1999. El resultado que más destaca es la constatación de la influencia de las transferencias discrecionales federales (Aportes del Tesoro Nacional) en los resultados electorales. En relación al segundo estudio, se da soporte a la hipótesis que indica que las divergencias en la representación política per cápita de los estados miembros (provincias), en el poder legislativo federal, es clave para poder explicar la asignación de las transferencias federales entre ellos.

II. Redistribución táctica: evidencia teórica y empírica

Tal como se ha descrito anteriormente, los modelos explicativos de la redistribución táctica se pueden subdividir en dos tipos, los modelos de distribución partidarios y no partidarios siguiendo la clasificación de Levitt & Poterba (1999). En esta sección se realiza un breve repaso de los principales trabajos existentes en cada caso.

II. 1 Modelos de distribución partidarios

a) *Modelos relacionados con el grado de competencia electoral existente:*

Las teorías de Lindbeck & Weibull y Dixit & Londregan plantean la competencia por los votos entre dos partidos políticos (A y B). Éstos maximizan sus porcentajes de votos y con este objetivo plantean las plataformas políticas que proyectan una redistribución fiscal de la renta entre el electorado utilizando el instrumento que tienen que son las transferencias discrecionales. Esta disputa se desarrolla en el marco de una democracia participativa donde los votantes tienen una preferencia previa sobre un partido y votan teniendo en cuenta tanto estas preferencias como los niveles de consumo prometidos por los dos partidos (en forma de ayudas impositivas, subsidios al municipio, etc). La población se divide en grupos identificados por sus ocupaciones, su localización u otras características, y dentro de cada uno la afinidad ideológica es heterogénea. $U_i(C_i)$ es la utilidad de un miembro del grupo "i" que proviene de su nivel de consumo. Este nivel de consumo depende de la cantidad de renta que posea el individuo y las transferencias, positivas o negativas, que le realice el gobierno ($C_i = Y_i + T_i$).

Las transferencias tienen la restricción de un presupuesto equilibrado, que equivale a decir que algunos distritos tendrán transferencias positivas que serán financiadas por transferencias negativas de otros distritos o de todos, vía impuesto "lump sum" igual para todos los individuos.

En cada región (en nuestro caso, municipio) existe una distribución de preferencias ideológicas [$F_j(X)$] que, con un nivel de transferencias prometidas, determina un valor crítico que divide a los votantes entre los que votan por un partido o por el otro.

Se supone que el individuo "i" tiene una ideología previa que lo inclinará hacia un partido político. El votante votará por el partido B, teniendo una preferencia X por el partido. De esta manera:

$$U_i(C_{iB}) - U_i(C_{iA}) \succ X$$

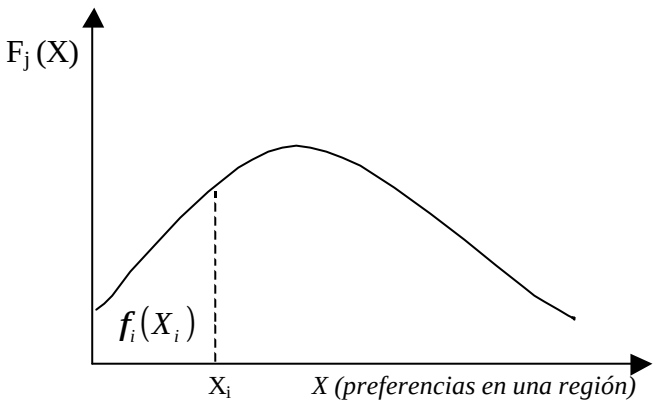
Esto demuestra el papel que juegan las transferencias discrecionales haciendo incrementar las posibilidades de consumo de las personas.

El punto crítico sería:

$$U_i(C_{iB}) - U_i(C_{iA}) = X_i$$

Este punto indica que todas las personas con una preferencia por el partido A de X menor a X_i votarán por B ($f_i(X_i)$) y el resto por A (Gráfico 1).

Gráfico 1. Determinación del punto crítico.



Por lo tanto y para el caso de un municipio con N votantes, el número de votos que recibiría el partido B sería de $f_i(X_i) * N_i$ y $(1 - f_i(X_i)) * N_i$ sería el número de votos recibidos por el partido A.

Para el caso de un distrito electoral (la provincia) que engloba a un cierto número de municipios (G) el número de votos para cada partido sería:

$$V_B = \sum_{i=1}^{G} f_i(X_i) * N_i$$

$$V_A = \sum_{i=1}^{G} [1 - f_i(X_i)] * N_i$$

El partido político B maximiza una función objetivo del tipo:

$$Max_{T_1^B;T_2^B...T_j^B} M^B = \sum_j N_j * F_j \left[U\left(Y_j + T_j^B\right) - U\left(Y_j + T_j^A\right) \right]$$

Sujeto a la restricción presupuestaria,

$$\sum_j N_j * T_j^P = 0 \text{ si } P = A, B$$

Aquí se observa como los diferentes niveles de preferencias por un partido y los niveles de transferencias impactan directamente en el número de votos de los diferentes partidos políticos.

De la maximización planteada resultan las condiciones de primer orden para el partido B,

$$f_j \left[U\left(C_j^B\right) - U\left(C_j^A\right) \right] * U_c\left(C_j^B\right) - m = 0$$

Los partidos intentan mover este punto crítico para incrementar su porcentaje de votos, utilizando las transferencias discrecionales. La principal conclusión de este modelo es que la cantidad de dinero recibida estará correlacionada positivamente con la densidad de este punto. Es decir si el punto crítico es muy denso, un pequeño cambio hacia uno u otro partido significará un importante cambio en los resultados electorales. Debido a la restricción presupuestaria, un incremento de gastos en un grupo de municipios, se debe compensar con una disminución en otros o en todos. La estrategia del partido gobernante es dar transferencia a municipios donde el punto crítico es muy denso y así ganar una buena cantidad de votos y disminuirlo en otro con escasa densidad que provocará la pérdida de poco electores (Gráfico 2 y 3).

Gráfico 2. Modificación del punto crítico debido a una transferencia positiva en municipio denso.

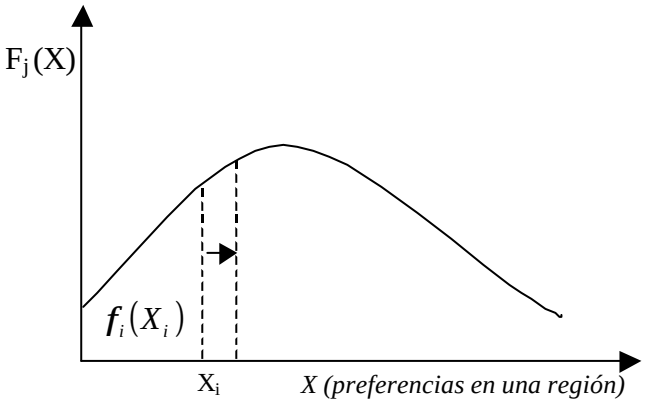
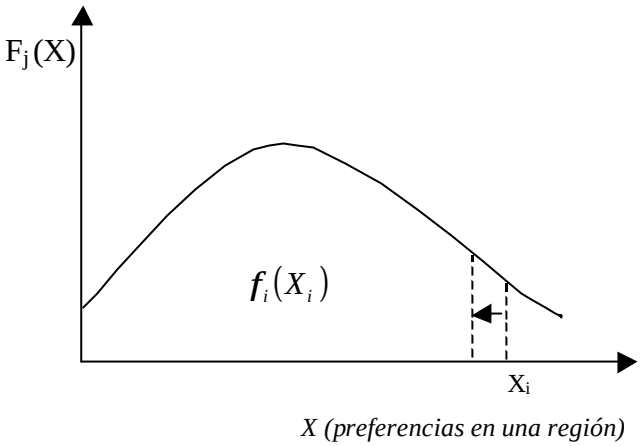


Gráfico 3. Modificación del punto crítico debido a una transferencia negativa en municipio poco denso.

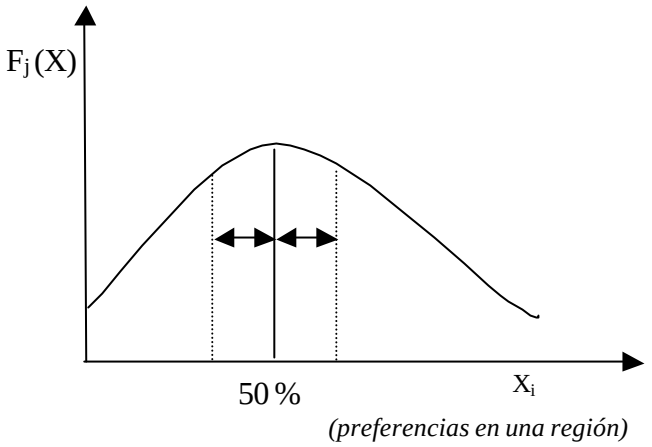


Otro elemento que incide sobre las transferencias es el nivel de renta de los diferentes municipios. Esta teoría predice que regiones con menores ingresos recibirían mayores niveles de transferencias, debido a que tienen una mayor utilidad marginal del ingreso y esto hace que sean más fácilmente persuadibles mediante la oferta de transferencias de un partido.

Las conclusiones del trabajo son que los distritos que recibirán más fondos serán aquellos donde haya un mayor porcentaje de individuos indiferentes entre los dos programas políticos (que implica ubicarse en un sector de mayor densidad de la curva) y que, por lo tanto, reaccionarían positivamente ante incrementos en el consumo vía transferencias y grupos con bajo ingreso. La estrategia del partido es aplicar un impuesto marginal al ingreso a todos los grupos y transferencias (positivas o negativas) a grupos específicos.

En la literatura empírica pueden hallarse maneras de estimar la densidad del punto crítico. En primer lugar está el método propuesto por Case (2001) en su trabajo sobre Albania donde supone que la función de distribución es simétrica y con una sola punta (de forma similar a los gráficos anteriormente expuestos). De esta manera, existe una correspondencia uno a uno entre la densidad del punto crítico y lo competida que resulte una elección. Por lo tanto, a mayor nivel de competencia, mayor densidad debido a que me acerco a la mitad de la función. Así, se utilizaría la distancia entre el partido gobernante y el 50 % (en valor absoluto) como proxy de la densidad del punto crítico (Gráfico 4).

Gráfico 4: Correspondencia entre la distancia al 50 % y la densidad del punto crítico según Case (2001)



La segunda opción aplicada consiste en utilizar el método propuesto por Johansson (2003) y empleado para los municipios de Suecia. Se desarrolla una manera de estimar la función de densidad utilizando un análisis factorial para resumir las preferencias de los ciudadanos en los diferentes distritos a partir de encuestas realizadas y luego de aplicar el estimador de densidad univariante de Kernel. En este caso se estima directamente para cada distrito electoral la función de densidad y luego se encuentra el punto crítico. Encuentra que si la función de utilidad de los votantes es cóncava, las transferencias estarán negativamente correlacionadas con el ingreso y positivamente correlacionadas con la densidad del punto crítico. Ambos métodos logran resultados robustos y en la línea planteada a nivel teórico que indica que a mayor densidad del punto crítico, mayores transferencias recibidas por los municipios. Si bien el primer método es más aproximado, su principal ventaja es la poca información que demanda para su aplicación, razón por la cual se utilizará en este trabajo.

b) Modelos relacionados con el grado de apoyo electoral:

Por otra parte, Cox & McCubbins plantean que los grupos de apoyo al candidato pueden influir en sus promesas electorales. En el modelo, todos los ciudadanos de un distrito son miembros de varios grupos, primarios y secundarios, donde la presencia en los mismos está determinada por diferentes condicionantes (e.g.: etnia, lengua, cultura, religión, ocupación, etc). Cada candidato, por su propio origen tiene diferente grado de preferencia entre los grupos. Los autores llegan a un equilibrio de Nash mediante el supuesto de concavidad en la función que indica la proporción por la cual un grupo votaría a un candidato según sus

propuestas, conociendo las del otro. Dividen a los votantes en tres grupos: el grupo de soporte del partido político, el grupo opositor y un grupo cambiante. Existe un juego redistributivo en las políticas electorales en que las estrategias de los candidatos son propuestas de redistribución de suma cero de beneficios entre los grupos que integran su electorado con el objetivo de maximizar los votos obtenidos. Los candidatos prometerán beneficios para los grupos con una alta tasa de retorno electoral y, por el contrario, no prometerán beneficios o serán promesas negativas para los que tengan una baja tasa.

Se realiza el supuesto clave que los partidos son aversos al riesgo y se predice que los políticos invertirán poco en los grupos opositores, algo más en los indecisos y un porcentaje aún mayor en los grupos de apoyo ("incondicionales"). Si el candidato fuera mas amante del riesgo invertiría más en los grupos cambiantes. Se concluye que se tenderá a sobreinvertir en sus grupos de seguidores que maximizan su expectativa de voto.

Para contrastar estas hipótesis se utilizan dos variables distintas: una dummy con valor 1 si el gobierno municipal es de igual partido al gobierno federal y el porcentaje del electorado municipal que vota por el gobierno federal. Se espera que en la medida que el apoyo que brinda un municipio al partido gobernante es mayor, mayores cantidades de transferencias debería recibir y en cuanto a la variable dummy si el alcalde es del mismo partido, debería recibir mayores transferencias.

c) Modelos relacionados con gobiernos multinivel

Los modelos presentados hasta el momento no tienen en cuenta la existencia de varios niveles de gobierno. Sin embargo, este hecho puede ser muy importante. Grossman (1994) desarrolla una teoría positiva de la distribución de las transferencias discrecionales por parte del gobernante, donde la asignación de las mismas se realiza con el objetivo de incrementar sus opciones de reelección. El político utiliza su control sobre los gastos federales para proveer bienes públicos y transferencias a los diferentes distritos electorales con el objetivo de influenciar en los votantes. Es razonable pensar que el político (gobernador en este caso) tiene en cuenta la efectividad de los políticos locales y de los grupos de interés local a la hora de influir en el voto. Según el modelo planteado, esta efectividad determina en el corto plazo las asignaciones de las transferencias federales. El modelo sugiere, por ejemplo, que el alcalde, en caso de ser del mismo partido que el gobierno central, podría ejercer como un agente político que ayudaría a ganar las elecciones. Como resultado de esto se espera que reciban más recursos municipios con alcalde del mismo partido que el

gobernador.

En su trabajo, Dasgupta & otros (2001) realizan una aproximación empírica de las teorías partidistas anteriormente comentadas introduciendo la variabilidad que puede producir que el gobierno de los distintos niveles esté en manos de diferentes partidos políticos. En una investigación realizada para la India encuentran que no siempre una mayor densidad en el punto crítico implicaría mayores transferencias recibidas por ese estado. Es el caso de los estados gobernados por un partido diferente al del gobierno central, en donde las transferencias son menor cuanta más densidad exista. La explicación indica que en elecciones muy competidas, que comportan densidades altas del punto crítico, tener un gobernante de otro partido político podría significar que el dinero entregado por el gobierno central contribuya a mejorar las posibilidades políticas de los partidos opositores.

II. 2 Modelos de distribución no partidarios

Dentro de esta clasificación existen diferentes trabajos que intentan desarrollar un modelo donde las transferencias tienen su explicación en las decisiones de los legisladores más que en los partidos políticos que representan.

Con su investigación, Levitt & Poterba (1999) intentan comprobar, para el Congreso de los Estados Unidos, el grado real de importancia del partido político con relación a la de los propios legisladores. En un principio, si la importancia del partido es mayor, se esperaría una asignación de los recursos hacia los distritos con mayor competencia electoral por encima de los distritos “seguros”. Sin embargo también puede esperarse que si el legislador intenta maximizar sus opciones de reelección, los fondos se aplicaran hacia su electorado con diferente grado de éxito según su posición en la cámara o en las comisiones respectivas. Por ejemplo, se espera que un legislador con experiencia y fuerte personalidad que le permita tener una gran prevalencia sobre sus pares pueda asignar una mayor cantidad de dinero hacia “su” distrito. En este trabajo se encuentran indicios de los dos tipos de comportamientos.

Otro trabajo referido a este parágrafo fue realizado por Milligan & Smart (2003), que llevan a cabo una investigación intentando determinar el rol de la política electoral en la asignación regional de subsidios para Canadá. Sugieren la hipótesis de que la asignación de las transferencias discrecionales, que realizan las agencias federales entre los diferentes distritos electorales, tiene como objetivo maximizar el número de

escaños para el gobierno federal. Desarrollan un modelo que tiene tres implicaciones principales. La primera afirma que los distritos con una marcada inclinación política deberían recibir menos dinero que los relativamente más indecisos. La segunda que los gastos se concentrarán en los distritos donde se espera una elección más competida. Por último, que el gasto per cápita tendería a decrecer con el incremento de la población del distrito. Esto último hace referencia a que distritos con pequeñas poblaciones representan "escaños baratos" por los que los partidos compiten intensamente. Los resultados obtenidos revelan una fuerte evidencia a favor de las hipótesis que los gastos se dirigen hacia los distritos con probables elecciones cerradas. Además se concluye que distritos con alguna representación en el gobierno federal obtienen relativamente más fondos y que son los distritos más pequeños los receptores de una mayor cantidad de dinero per cápita.

El trabajo de Levitt & Snyder (1995) encuentra evidencia de que los partidos políticos juegan un rol significativo para determinar la distribución geográfica de los gastos federales en los Estados Unidos. Observan que los gastos realizados en el marco de programas asistenciales eran una función positivamente relacionada con los votos demócratas en cada distrito, apoyando la teoría de que los partidos políticos en el Congreso Nacional son un grupo de legisladores que en ocasiones se unen para lograr el éxito colectivo y en otras priman más los intereses individuales y sus compromisos con los distritos que los han escogido. Por lo tanto este trabajo daría credibilidad a ambas ideas teóricas, la partidista y no partidista.

En relación a la factibilidad de llevar a la práctica las ideas teóricas, podemos decir que los modelos partidistas son más fácilmente de contrastar debido a que demandan información básica referida a la realidad económica y demográfica y sobre los resultados electorales, con la problemática de establecer el punto crítico y su densidad.

En cambio, poder establecer el peso de los diferentes congresistas en el parlamento y su relación con las ayudas recibidas a su distrito de origen requiere de información más específica y por lo tanto son más difíciles de corroborar empíricamente.

III. Descripción institucional

Argentina, como país en desarrollo y bajo un sistema federal, con un gobierno central, gobiernos estatales (provincias) y municipios, brinda la posibilidad de analizar los modelos teóricos planteados y observar en qué grado se corresponde con la realidad de uno de sus estados. Uno de ellos es la provincia de Córdoba, cuyo gobierno está dividido entre el poder ejecutivo (ejercido unipersonalmente por el gobernador) y el poder legislativo, conformado desde el año 2001 por una sola cámara de representantes. El gobernador y el vice-gobernador son elegidos directamente por el pueblo de la provincia mediante la simple pluralidad de sufragios. Esta provincia tiene una antigua tradición radical (Unión Cívica Radical) que consagró a candidatos de ese partido desde el regreso a la democracia en 1983 y hasta las elecciones adelantadas de 1998. Desde ese momento y hasta la actualidad (2004) el poder ejecutivo está a cargo de un representante del Partido Justicialista[1]. En referencia a las diferencias ideológicas que plantean algunos modelos teóricos que deberían existir entre los dos partidos competidores, y que en muchos países se decantan entre fuerzas de izquierdas y derechas, en nuestro caso y para la provincia analizada, no existe una diferencia tan clara en este aspecto, ya que los partidos a lo largo del tiempo han ido variando sus posturas ideológicas.

Los gobiernos, tanto federal como provincial, disponen de ciertas cantidades de dinero para realizar transferencias discrecionales a los municipios, además de las transferencias obligadas por diferentes leyes que regulan la distribución de los recursos impositivos. En el caso de los municipios de Córdoba, éstos en promedio durante el año 2000 se financiaron su presupuesto con ingresos corrientes en un 89 % y de capital en un 11 %. Dentro del primer concepto se encuentran las tasas y contribuciones (ingresos propios) que participan en un 45 %, los ingresos por transferencias determinadas por fórmulas en un 37 % y el resto por otros ingresos donde aparecen las transferencias discrecionales, con una participación media del 6,75 %, aunque presentando una alta variabilidad.

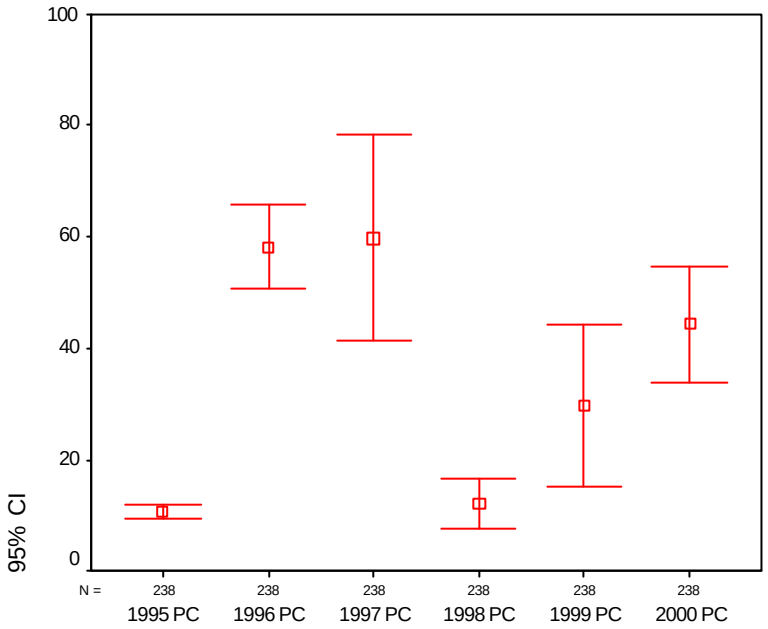
Éstas características, gobiernos elegidos democráticamente, con dos partidos mayoritarios y la existencia de transferencias discrecionales, permiten aplicar los modelos teóricos planteados anteriormente.

En el gráfico siguiente (Gráfico 4) podemos observar la distribución de las transferencias discrecionales per cápita a lo largo de seis años. Es interesante analizar el comportamiento registrado los años

[1] La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista son las dos fuerzas políticas predominantes en la provincia.

1996 y 1997 en relación al año 1995. En la medida que se acercan las elecciones a gobernador, las transferencias medias crecen significativamente al igual que el intervalo de significación, lo que indica un notable incremento de la variabilidad en los fondos recibidos por este concepto de la provincia entre los municipios. Se puede observar que en el año electoral las transferencias descienden fuertemente para luego comenzar a crecer año a año, coincidiendo con la aproximación temporal a las siguientes elecciones.

Gráfico 4: Transferencias Discrecionales per cápita. Media e intervalo al 95 %.



Fuente: Ministerio de Economía. Argentina.

Estas variaciones en las transferencias discrecionales son las que se intentarán explicar utilizando los modelos teóricos que contemplan la influencia política, con el objetivo de comprobar si ésta determina y en que grado dichas variaciones. En el actual trabajo se analizarán las transferencias realizadas los años 1999 y 2000 y su relación con los resultados electorales de 1998.

IV. Contrastación empírica

En el siguiente apartado se analiza la contrastación empírica de las teorías mencionadas dentro de los modelos de distribución partidarios. Se plantea una función de la forma:

$$T_{t;k} = f\left(Variables.Políticas_{t-h;k}; Variables.Control_k\right)$$

La variable dependiente son las transferencias discrecionales per cápita recibidas por los municipios de la provincia de Córdoba (k), durante el período 1999 – 2000 (t), siguiente a las elecciones a gobernador de 1998 (período t-h). Como regresores se incorporan diferentes variables políticas que aproximan las diferentes teorías enunciadas en la sección anterior y que se derivan del proceso electoral, y las variables de control que supuestamente no varían en el corto plazo en el que se enmarca el estudio.

Con el objetivo de poder contrastar si los gobiernos utilizan tácticamente las subvenciones discrecionales, se debería intentar, según Dahlberg & Johansson (2002) cumplir algunos requisitos esenciales. El primero de estos es que el gobierno debe poder decidir a que distrito electoral le transfiere las subvenciones y a cuál no. En el caso que analizaremos, esta condición se cumple al utilizar fondos discrecionales que se distinguen de las transferencias que se distribuyen mediante fórmula. La segunda condición es que se pueda desvincular estas subvenciones de objetivos de equidad y eficiencia. En el caso del estudio se insertan variables socioeconómicas de cada municipio como variables de control que son necesarias para evitar exagerar el impacto político en las decisiones de distribución de los fondos (problema descrito por Levitt & Snyder (1997)). Una tercera indica que las subvenciones deben ser realizadas en tiempos cercanos a la elección. Esta afirmación se basa en la observación empírica de que el incremento en el gasto afecta las decisiones de los electores, mediante la creación de un compromiso con el gobierno que brinda la ayuda, o bien como la sensación de que si un gobierno ayudó en el pasado lo hará en el futuro. En nuestro caso las elecciones se efectuaron a finales de 1998 y se analizan las transferencias para los años 1999 y 2000. Por último se pide que los votantes conozcan quién de los diferentes niveles de gobierno financia una determinada obra pública o brinda un servicio. Este concepto es importante para desvincular las ayudas, en este caso provinciales, de las recibidas de otros niveles de gobierno, el nacional o de la recaudación propia del municipio. Este punto es de difícil cumplimiento debido a la existencia de información asimétrica por parte de la población del municipio. En algún caso y sobre todo cuando los gobiernos son de distinto color político, podría darse el caso de alcaldes que utilicen fondos provinciales para realizar determinada obra y den la imagen ante la población que es el municipio el que realmente financia la mejora, generando el impacto político contrario. Se intentará medir su impacto incluyendo la dummy si el alcalde es del mismo partido político que el gobierno provincial. relacionada a las variables políticas utilizadas.

Siguiendo el cuadro expuesto por Dahlberg & Johansson (2002) se podría esperar los siguientes resultados según los dos modelos teóricos mencionados (Tabla 1).

Tabla 1: Signos Esperados de las variables según las diferentes teorías.

Variable	*L & W. – D & L.*	*C & McC.*	*Grossman*
Densidad del punto crítico	+		
Distancia entre partidos centrales en la elección municipal	-		
Renta	-		
Mayoría del partido gobernante a nivel federal en el municipio (dummy alcalde)		+	+
% votos del partido central en el municipio		+	

Como se ha comentado según la teoría de Lindbeck & Weibull y Dixit & Londregan la densidad del punto crítico debería impactar positivamente en las transferencias, indicando que cuanto mayor sea la cantidad de personas que integren el grupo con baja preferencia por algún partido, mayores fondos debería recibir. En cambio, la distancia entre las dos fuerzas políticas mayoritarias y el ingreso impactarían en forma negativa. Según Cox & McCubbins el grado de soporte en el distrito, medido como el porcentaje de votos obtenido a nivel municipal en las elecciones provinciales, por el partido que gobierna en la provincia, debería impactar positivamente. Igual relación con las transferencias tendría el hecho de tener una mayoría política en el mismo (evaluada en este caso como una con valor 1 si el alcalde es del Partido Justicialista).

V. Datos y Especificación Empírica

Se utilizan datos de 238 municipios de la provincia de Córdoba que representan el 96,35 % del total de municipios y el 86,46 % del total de la población. En ambos casos los porcentajes son sobre el total de

municipios exceptuando el municipio capital de la provincia. En el cuadro siguiente (Tabla 2) se especifican las variables utilizadas, variables políticas que intentan probar el cumplimiento o no de las diferentes teorías mencionadas y variables de control.

Tabla 2: Descripción de las Variables.

Variable	Descripción	Signo Esperado
TRANSF	Transferencias discrecionales per cápita de la provincia a los municipios. Promedio 1999-2000.	
	a) Variables Políticas	
DIF50	Diferencia porcentual en las elecciones municipales, entre el partido que gobierna la provincia y el 50 % (en valor absoluto).	-
DIFBLOQUES	Diferencia porcentual en las elecciones municipales entre el partido que gobierna en la provincia y el segundo partido político (en valor absoluto).	-
% PJ	Porcentaje de votos que obtiene en cada municipio, el partido gobernante a nivel provincial.	+
ALC	Dummy que toma el valor 1 si el alcalde es de igual partido que el gobierno provincial.	+
	b) Variables de Control	
POB	Población del municipio.	-
POB2	Población al cuadrado del municipio.	?
NBI	Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas[2].	+

[2] Indicador elaborado por el INDEC referido a las condiciones de vida de los hogares.

Variable	Descripción	Signo Esperado
EMPLEO	Población ocupada / Población civil en el municipio	+
COM	Porcentaje de la población ocupada dedicada al sector comercial.	+
SERV	Porcentaje de la población ocupada dedicada al sector servicios.	+
DENS	Densidad de población del municipio. Información disponible sólo por Departamento.	?

En la aplicación empírica se utiliza como variable dependiente a las transferencias per cápita, utilizando el promedio de los años 1999 y 2000. Las variables independientes se subdividen en las políticas y las de control.

Dentro de las variables políticas se encuentran la variables DIF50 que es una proxy de la densidad del punto crítico [siguiendo a Case (2001)], DIFBLOQUES, que intenta medir el grado de competencia que existió en la elección, % PJ intenta comprobar la teoría de Cox y McCubbins en relación a los grupos de soporte, ALC que es una dummy para evaluar el impacto en las transferencias en caso de tener o no el partido gobernante a nivel provincial un alcalde del mismo partido. ALC * DIF50, (1-ALC) * DIF50, ALC * DIFBLOQUES, (1-ALC) * DIFBLOQUES y ALC * % PJ son variables que intentar descubrir si existen diferencias en el impacto de cada una de las variables sobre las transferencias en el caso de que el alcalde sea del mismo partido que el provincial.

En relación a las variables de control incorporadas, se encuentra la POB, POB2 y DENS, que servirán para medir las necesidades del municipio y establecer si las transferencias responden linealmente o no a los cambios en la población. NBI es una variable proxy del nivel de pobreza de los municipios, EMPLEO es un variables que intenta reflejar el nivel de actividad económica, por último, COM y SERV son variables que intentan reflejar la estructura productiva del municipio.

En el siguiente cuadro (Tabla 3) se presenta los principales indicadores descriptivos de las variables.

Tabla 3: Definición, análisis descriptivo y fuente de las variables utilizadas

Variables	Min.	Máx.	Media	Desviación Estándar	Fuente / Año
TRANSF (en pesos)	0	670,260	37,002	76,732	Ministerio de Economía de la Nación. 1999 y 2000.
TRANSF (si ALC = 1) (en pesos)	0,527	670,260	38,950	87,160	
Variables Políticas					
DIF50 (en %)	0,117	20,230	5,679	4,413	Gobierno de la Provincia de Córdoba. 1998.
% PJ (en %)	29,769	68,649	49,509	7,184	
DIFBLOQUES (en %)	0,070	46,623	12,146	9,349	
ALC	0	1	0,550	0,500	
ALC * DIF50 (en %)	0	18,649	2,874	4,116	
ALC * % PJ (en %)	0	68,649	28,627	26,566	
ALC * DIFBLOQUES (en %)	0	46,623	7,050	9,706	
ALC * DIF50 si Alcalde = 1) (en %)	0,11	18,6	5,262	4,291	
Alcalde * % PJ (si Alcalde = 1) (en %)	39,2	68,6	52,411	6,361	
ALC * DIFBLOQUES (si Alcalde = 1) (en %)	0,007	46,6	12,907	9,842	
Variables de Control					
POB (en hab.)	113	134355	5766,440	11815,910	Censo Nacional 1991.
POB2			172284362	1231920054	Censo Nacional 1991.
NBI (en %)	1,770	39,540	12,998	5,442	INDEC. 1991.
EMPLEO (en %)	1,163	95,505	11,615	7,977	Censo Nacional Económico. 1994.
COM (en %)	8,759	100	46,399	17,387	
SERV (en %)	0	85,185	36,175	17,377	
DENS (en hab./Km^2)	1,2	57,3	16,720	15,146	Densidad Promedio 1991 – 2001. En base a INDEC. Por departamento.

La inspección de los datos de la tabla anterior permite obtener algunas conclusiones interesantes. En relación a las transferencias, aunque no se aprecian sensibles diferencias en las transferencias medias entre los municipios gobernados por el partido gobernante en la provincia y los otros existe una alta variabilidad entre los municipios. En cuanto al porcentaje de votos obtenidos por el partido gobernante (% PJ) varía entre el 30 y el 70 de mínima y máxima, respectivamente, con una media del 50 % para todos los municipios. Si sólo tomamos en cuenta los municipios gobernados por el mismo partido, el límite inferior crece en diez puntos y

la media en 2 puntos porcentuales. Por otra parte, no se aprecian cambios importantes entre los valores observados en las diferencias porcentuales entre los dos partidos mayoritarios (DIFBLOQUES) y la diferencia con el 50 % (DIF50), para el total de los municipios en comparación con los municipios gobernados por el partido del gobierno provincial que se sitúan en un 12 % y un 6 %, respectivamente.

Otro dato interesante es que el 55 % del los municipios están gobernados por el partido que gobierna la provincia. En relación a la distribución de los trabajadores según las diferentes áreas de la economía que permitiría estimar la estructura productiva media, se observa que el comercio ocupa al 46,4 % de los trabajadores, el servicios le sigue con el 36,2 % y la industria con 17,4 %.

VI. Resultados

Los resultados se exponen en dos tablas. La primera de las cuales (Tabla 4) hace referencia a las regresiones donde se intenta probar la tesis de Cox y McCubbins que indicaría que a mayor porcentaje de votos en un municipio, mayor es la cantidad de transferencia que recibiría. Se agrega como variable política una dummy que indica si el alcalde es del mismo partido político, según lo expuesto por Grossman (1994).

Previamente se realizó una prueba de selección de modelos utilizando el estadístico F, y se descartó la utilización de una dummy por cada departamento en que se divide la provincia. Además se realizó un contraste de significación de subconjunto de parámetros con el objetivo de corroborar la importancia de las variables políticas y de control como grupo individual en la estimación de las transferencias discrecionales.

Tabla 4: Contrastación de la Teoría Cox – McCubbins.

Variable dependiente: transferencias discrecionales per cápita. OLS.

Variables	1	2	3	4
% PJ	0,584 (0,869)	0,739 (1,024)	0,524 (0,881)	
ALC	-1,869 (-0,193)			2,030 (0,237)
ALC * % PJ		-0,102 (-0,528)		
POB * 10^3	-2,340 (-2,918) ***	-2,320 (-2,896) ***	-2,360 (2,966)***	-2,400 (-3,001)***
POB2 * 10^8	1,067 (2,136) **	1,597 (2,125) **	1,616 (2,156)**	1,639 (2,182)**
NBI	2,467 (2,862) ***	2,473 (2,872) ***	2,469 (2,872)***	2,455 (2,851)***
EMPLEO	5,396 (9,074) ***	5,414 (9,126) ***	5,382 (9,133)***	5,323 (9,046)***
COM	1,192 (3,209) ***	1,204 (3,251) ***	1,183 (3,218)***	1,137 (3,109)***
SERV	0,333 (0,986)	0,341 (1,012)	0,328 (0,978)	0,311 (0,927)
DENS	-0,127 (-0,414)	-0,138 (-0,451)	-0,123 (-0,405)	-0,129 (-0,423)
Cte	-140,095 (-2,902) ***	-146,953 (-2,962) ***	-137,401 (2,979)***	-108,732 (-3,394)***
Nº obs.	238	238	238	238
R2 corregida	0,280	0,280	0,283	0,280
Test F	11,223	11,261	12,674	12,545
F sub. Políticas	5,644			
F sub. Control	13,585			

Estadístico t entre paréntesis. *** Significativo al 99 %. ** Significativo al 95 %. * Significativo al 90 %.
Se realizó un test de significatividad de subconjuntos de parámetros donde $F_{(0,05;\ 7;\ 200)} = 2,06$. Los resultados indican que en ambos casos se rechaza la hipótesis nula, lo que confirma la necesidad de introducir variables de los dos tipos en la regresión.

Los resultados indican que la variable política relacionada al porcentaje de votos no resulta significativa en ninguna de las regresiones realizadas ni aún cuando está combinada con la dummy alcalde que permitiría medir si hay relación entre el porcentaje de votos obtenido por el partido gobernante y el hecho de que el alcalde sea del mismo partido. El mismo resultado se obtiene de la dummy alcalde actuando sola. Ambos resultados permitirían decir que la teoría de Cox & McCubbins no se aplicaría en este caso ni la idea

de Grossman sobre los gobiernos multinivel. Por el contrario, las variables de control si que impactan en la distribución de transferencias. La población presenta un signo negativo, indicando que municipios más poblados reciben menores transferencias per cápita e indicando que las necesidades de los municipios decrecen a nivel per cápita con el incremento de la población influenciadas por las economías de escala existentes en la producción de los bienes públicos locales. La población al cuadrado es significativa, dando la idea que la relación entre población y transferencias no es lineal, y que los municipios más grandes recibirían más transferencias debido a mayores costes por congestión o por el mayor poder político de los mismos. Por su parte, la variable que mide la pobreza (NBI) es significativa, al igual que las variables que mediría la tasa de ocupación (EMPLEO) y el porcentaje de trabajadores dedicados al sector comercial (COM). Esto indicaría que los municipios con mayor nivel de pobreza y con mayor nivel de actividad económica recibirían más transferencias, cantidad que se incrementaría si el comercio se encuentra mas desarrollado, como podría ocurrir en municipios turísticos (tipología de municipios existentes en la provincia). El impacto sobre las transferencias sería de 2,46 pesos por cada punto porcentual que se incrementa el índice de pobreza, 5,4 pesos para el caso de un incremento en la tasa de ocupación y de 1,19 pesos ante un incremento en el porcentaje de trabajadores del sector comercial. Estos valores son anuales y per cápita y hacen referencia exclusivamente a las transferencias discrecionales.

En el segundo grupo de regresiones (Tabla 5), se intenta probar las teorías de Dixit & Londregan y Lindbeck & Weibull, incorporando como variable proxy del punto crítico al diferencial entre el porcentaje obtenido por el partido gobernante y el 50 % [siguiendo a Case (2001)] y otra variable relacionada que indica la diferencia entre los dos partidos mayoritarios. Además, se agregan dos variables que relacionan los anteriores conceptos con la posibilidad de que el alcalde sea del mismo partido, idea extraída del trabajo de Dasgupta & otros (2001). Finalmente se repiten la dummy del alcalde y las variables de control.

Tabla 5: Contratación de la Teoría Dixit & Londregan y Lindbeck & Weibull
Variable dependiente: transferencias discrecionales per cápita. OLS.

Variables	5	6	7	8	9	10
DIF50	2,921 (2,872)***		2,967 (2,901) ***			
DIFBLOQUES		1,061 (2,211)**		1,063 (2,194) **		
ALC			4,248 (0,502)	-0,251 (-0,029)		
ALC * DIF50						3,266 (2,741)***
(1-ALC) * DIF50						2,615 (2,264)**
ALC * DIFBLOQUES					0,872 (1,708)**	
(1-ALC) * DIFBLOQUES					1,495 (2,400)***	
POB * 10^3	-2,010 (-2,526)***	-2,170 (2,724)***	-2,030 (-2,549) ***	-2,170 (-2,702) ***	-2,120 (-2,663)***	-2,020 (-2,540)***
POB2 * 10^8	1,393 (1,877)**	1,476 (1,979)**	1,405 (1,889) **	1,475 (1,970) **	1,452 (1,947)**	1,406 (1,891)**
NBI	1,855 (2,131)**	2,012 (2,300)**	1,858 (2,130) **	2,011 (2,290) **	1,897 (2,154)**	1,885 (2,157)**
EMPLEO	5,323 (9,222)***	5,462 (9,348)***	5,306 (9,161) ***	5,463 (9,305) ***	5,471 (9,366)***	5,319 (9,201)***
COM	1,308 (3,598)***	1,288 (3,507)***	1,300 (3,567) ***	1,290 (3,491) ***	1,294 (3,521)***	1,310 (3,599)***
SERV	0,383 (1,158)	0,366 (1,099)	0,378 (1,140)	0,367 (1,097)	0,388 (1,164)	0,378 (1,140)
DENS	0,031 (0,103)	-0,009 (-0,030)	0,044 (0,145)	-0,009 (-0,031)	-0,028 (-0,092)	0,037 (0,122)
Cte	-131,441 (-4,061)***	-128,440 (-3,907)***	-133,384 (-4,085) ***	-128,381 (-3,889) ***	-128,845 (-3,921)***	-131,863 (-4,067)***
Nº obs.	238	238	238	238	238	238
R2 corregida	0,305	0,295	0,303	0,292	0,296	0,330
Test F	14,017	13,413	12,447	11,871	12,065	12,457
F sub. Políticas	5,644					
F sub. Control	13,585					

Estadístico t entre paréntesis. *** Significativo al 99 %. ** Significativo al 95 %. * Significativo al 90 %.

Se realizó un test de significatividad de sub. de parámetros, $F_{(0,05;\ 7;\ 200)} = 2,06$. Los resultados indican que en ambos casos se rechaza la hipótesis nula.

En este caso, las variables políticas DIF50 y DIFBLOQUES resultan significativas, aunque con el signo positivo y contrario al esperado por el modelo teórico. Esto indicaría, en un análisis inicial, que en la medida que el partido del gobierno se aleja del 50 % y/o se amplia la diferencia con el principal partido opositor en cada municipio, este recibiría más transferencias. Este resultado podría dar la idea de los grupos de soporte dada en el modelo de Cox & McCubbins. Cuando se realiza la regresión con la variable DIF50, diferenciando entre los municipios que tiene el alcalde del mismo partido y que no, se obtiene un resultado significativo y con signo positivo. Esto podría interpretarse de forma diferente en cada caso según la lógica política que indica que si el alcalde es del mismo partido, en la medida que la diferencia con el 50 % se amplia le envía más transferencias con la intención de asegurar el municipio que apoya al partido. Esto cambia cuando el municipio no es del mismo partido, ya que si la diferencia con el 50 % se reduce, las transferencias también debido a que el alcalde puede actuar como un agente local que se aproveche del dinero enviado para ganar votos dirigidos a su partido. Similar interpretación tienen los coeficientes resultantes de la variable DIFBLOQUES en el caso de alcalde de igual o no signo político. Mayores diferencias porcentuales en los municipios del partido gobernante en la provincia, implicarán mayores transferencias recibidas, lo que da a entender que el gobierno confía en la representación que tiene a nivel local para que le proporcione votos en las próximas elecciones. Por el contrario, cuando el alcalde es opositor, el gobierno provincial disminuye sus transferencias en la medida que la elección es más competida intuyendo que este dinero se aplicará a ganar votos para el partido del alcalde, aprovechando la información asimétrica de los votantes que no podrían distinguir si una obra u otra mejora del municipio es debido a la financiación pública local o provincial.

Estos resultados, comentados anteriormente, se interpretan como la existencia de un comportamiento diferencial por parte del gobierno provincial en el tratamiento de los municipios según su color político, en consonancia al trabajo de Dasgupta y otros (2001). En cambio, la variable alcalde continúa sin resultar significativa y las variables de control, en general, tienen un comportamiento similar al observado anteriormente.

VII. Conclusiones

En este trabajo se ha intentado comprobar en qué grado las diferentes teorías sobre el concepto de la táctica política se podrían ajustar a un país en vías de desarrollo y con un gobierno federal, realizando el estudio para uno de los estados en que se subdivide. Dentro de las teorías políticas encontramos los modelos partidistas (utilizados en este trabajo) y los no partidistas. Dentro de los modelos teóricos partidistas que se intentaron contrastar se encuentran los modelos relacionados con elecciones competidas (elaborados por Lindbeck & Weibull y Dixit & Londregan); los relacionados con el grado de soporte electoral (por parte de Cox & McCubbins) y los relacionados con gobiernos multinivel (con ideas elaboradas por Grossman y Dasgupta & otros). La presente investigación se inserta en la literatura empírica que intenta contrastar las teorías que incorporan la táctica política como determinante de las transferencias intergubernamentales de tipo discrecional.

En primer término se intentó contrastar la teoría de Cox & McCubbins, insertando variables políticas relacionadas al porcentaje de votos y una variable dummy si el alcalde era del mismo partido político. Los resultados permiten concluir que en este caso y durante el período analizado no se estaría cumpliendo esta teoría.

En segundo lugar se incorporaron variables relacionadas a la teoría de las elecciones competidas. Un concepto importante para el análisis empírico fue determinar el punto crítico que indica la cantidad de votantes con bajo grado de preferencias ideológicas por algún partido y que son por lo tanto más fáciles de convencer con las transferencias que hay sobre el total de la población de cada municipio. Se utilizó una variable proxy (DIF50) que resultó significativa y con signo positivo y contrario al esperado. Además la variable que medía la diferencia porcentual entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en la provincia, resulta significativa y con signo positivo y en principio también contrario al esperado.

Pero existe un resultado interesante donde se relacionan la variable DIFBLOQUES, una proxy del grado de competencia en la elección y el hecho de que el alcalde sea o no del mismo partido político que el partido gobernante en la provincia (ALC * DIFBLOQUES), idea extraída del trabajo de Dasgupta y otros. Aquí los resultados indican la existencia de un comportamiento diferencial por parte del gobierno provincial en el tratamiento de los municipios según su color político. En el caso de que el municipio sea de su partido, a menor diferencia electoral en las últimas elecciones mayor nivel de transferencias, lo que da a entender que el

gobierno confía en la representación que tiene a nivel local para que le proporcione votos en las próximas elecciones. En cambio, si el municipio está gobernado por otro partido, el gobierno local en la medida que la elección es más competida, disminuye sus transferencias, intuyendo que este dinero se aplicará a ganar votos para el partido del alcalde, aprovechando la información asimétrica de los votantes que no podrían distinguir si una obra u otra mejora del municipio es debido a la financiación pública local o provincial.

Estos resultados permiten alcanzar para poder afirmar que en el caso estudiado no se contrastarían ninguno de los modelos teóricos explicados al inicio, sino una combinación de ellos. La diferenciación entre municipios con alcaldes del mismo partido o no que el gobierno provincial, relacionada con las variable políticas sugeridas por los modelos de Lindbeck & Weibull y Dixit & Londregan, acaba siendo clave para entender la asignación de las transferencias entre los municipios de la provincia de Córdoba. Las ideas de Grossman y Dasgupta & otros acaba siendo importantes para entender estos resultados.

En cuanto a las variables de control, es interesante comentar que en todos los casos existieron un grupos de variables que siempre resultaron significativas, como es el caso de la población. Ésta presenta un signo negativo, indicando que municipios más poblados reciben menores transferencias per cápita e indicando que las necesidades de los municipios decrecen a nivel per cápita con el incremento de la población, influenciadas por las economías de escala existentes en la producción de los bienes públicos locales. La población al cuadrado es significativa, dando la idea que la relación entre población y transferencias no es lineal, y que los municipios más grandes recibirían más transferencias debido a mayores costes por congestión o por el mayor poder político de los mismos. La variable referida al nivel de pobreza del municipio (NBI) resulta significativa, al igual que EMPLEO referida al nivel de actividad económica del distrito. Por último la variable COM, referida al porcentaje de la PEA dedicada al comercio tiene un impacto positivo en las transferencias, indicando que municipios con altos porcentaje relativo de actividades relacionadas con el comercio (turismo, por ejemplo) tendrían una mayor asignación en las transferencias.

VIII. Bibliografía

Abuefalia, E., Meloni, O., 2000. "Determinantes económicos de los resultados electorales en la Argentina, Evidencia a partir de datos de panel". *Anales de la XXXV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, Córdoba*.

Boadway, R., Flatters, F., 1982. "Efficiency and equalization payment in a federal system of government: a synthesis an extension of recent results". *Canadian Journal of Economics* 15.

Case, A., 2001. "Election goals and income redistribution: recent evidence from Albania". *European Economic Review* 45: 405 – 423.

Cox, G., McCubbins, M., 1986. "Electoral politics as a redistributive game". *The Journal of Politics* 48: 370 – 389.

Dahlberg, M., Johansson, Eva. 2002. "On the Vote-Purchasing Behavior of Incumbent Governments". *American Political Science Review* 96: 27-40.

Dasgupta, S., Dhillon, A., Dutta, B. 2001. "Electoral Goals and Centre – State Transfers: A Theoretical Model and Empirical Evidence from India", mimeo: www.bu.edu/econ/ied/neudc/papers/BDuttta-final.pdf

Dixit, A., Londregan, J. 1998. "Ideology, tactics, and efficiency in redistributive politics". *Quarterly Journal of Economics* 113: 497 – 529.

Dixit, A., Londregan, J. 1996. "The determinants of success of special interests in redistributive politics". *Journal of Politics* 58: 1132 – 1155.

Gramlich, E., 1977. "Intergovernmental grants: a review of the empirical literature". In: W, E, Oates ed,, *The Political Economy of Fiscal Federalism*, Lexington Books, Kentucky, 219 – 240.

Grossman, P., 1994. "A political theory of intergovernmental grants", *Public Choice* 78: 295 – 303.

Inman, R., 1988. "Federal assistance and local services in the United States: the evolution of a new federalism fiscal order". En H. S. Rosen, ed., *Fiscal Federalism: Quantitative Studies* (University of Chicago Press, Chicago) 33 – 74.

Johansson, E., 2003. "Intergovernmental grants as a tactical instrument: empirical evidence from Swedish municipalities". *Journal of Public Economics* 87: 883 – 915.

LeGrand, J., 1975. " Fiscal equity and central government grants to local authorities". *The Economic Journal 85:* 531 – 547.

Levitt, S., Porterba, J., 1999. "Congressional distributive politics and state economic performance". *Public*

Choice 99: 185 – 216.

Levitt, S., Snyder, J., 1995. "Political parties and the distribution of federal outlays". *American Journal of Political Science* 39: 958 – 980.

Levitt, S., Snyder, J., 1997. "The impact of federal spending on house election outcomes". *Journal of Political Economy* 105: 30 – 53.

Lindbeck, A., Weibull, J., 1993. "A model of political equilibrium in a representative democracy". *Journal of Public Economics* 51: 195 – 209.

Lindbeck, A., Weibull, J., 1987. "Balanced – budget redistribution as the outcome of political competition". *Public Choice* 52: 273 – 297.

Milligan, K., Smart, M., 2003. "Regionalism and pork barrel politics". Preliminary draft. www.economics.utoronto.ca/msmart/research.html

Oates, W., 1972. *Fiscal Federalism*. Hartcourt, Brace, Jovanovich, New York.

Porto, A., Sanguinetti, P., 2001. "Political determinants of intergovernmental grants: evidence from Argentina". *Economics and Politics* 13: 237 – 256.

Strömberg, D., 2004. "Radio's impact on public spending". *The Quarterly Journal of Economics*. February 2004: 189 – 221.

Wallis, J., 1998. "The political economy of new deal spending revisted, again: with and without Nevada". *Explorations in Economic History* 35: 140 – 170.

Wrigth, G., 1974. "The political economy of new deal spending: an econometric analysis". *The Review of Economics and Statistics* 56: 30 – 38.